

NEW LEFT REVIEW 78

SEGUNDA ÉPOCA

ENERO FEBRERO 2013

ARTÍCULOS

GÖRAN THERBORN	Las clases en el siglo XXI	11
JACOB COLLINS	¿Un giro antropológico?	39
PATRICK WILCKEN	La hora del juicio en Brasil	71
MARIO SERGIO CONTI	El ascenso de los creadores de imágenes	91
ANDREW SMITH	Trabajar cara al público	109
MICHAEL CRAMER	Las lecciones de historia de Rossellini	125

CRÍTICA

JENNIFER PITTS	¿Una geocultura liberal?	147
BARRY SCHWABSKY	Artistas bajo la bandera	157
JAN BREMAN	Historias de Annawadi	164

La nueva edición de la New Left Review en español se lanza desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador-IAEN,

WWW.NEWLEFTREVIEW.ES

© New Left Review Ltd., 2000

© Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), 2014, para lengua española

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)



SUSCRÍBETE



tráficoantes de sueños

BRASIL: INTRODUCCIÓN

Las naciones asumen su pasado o –más a menudo– fracasan al hacerlo de diferentes maneras. Pocos países ofrecen un ejemplo más significativo que Brasil. Famoso por su propia versión de lo que en Italia se conocería como trasformismo –la fluida mutación de personas e instituciones en lo contrario de lo que una vez representaron– Brasil se caracteriza por haber ampliado el modelo para incluir también acontecimientos y memorias. En los textos que vienen a continuación, Patrick Wilcken y Mario Sergio Conti analizan dos ejemplos llamativos, ambos con una fuerte reverberación contemporánea. A finales de la década de 1970 y principios de la siguiente, la dictadura militar que gobernaba el país desató una draconiana represión contra los intentos de oponer resistencia, reducidos en términos relativos: la tortura y las «desapariciones» se convirtieron en prácticas habituales. Desde la llegada de la democracia –y a diferencia de cualquiera de sus vecinos– en Brasil no se ha realizado un informe veraz sobre estas prácticas ni ningún enjuiciamiento de sus autores. Wilcken expone las maneras en que el establishment político del país, desde Cardoso a Lula, se confabuló con un ejército que no mostraba ningún arrepentimiento para barrer los crímenes del pasado bajo la alfombra de las garantías que, antes de renunciar al poder, los torturadores se concedieron a sí mismos. Si finalmente se ha creado una Comisión Nacional de la Verdad, sus conclusiones todavía están por ver y la inmunidad de los militares todavía tiene que ser revocada. Conti relata cómo las primeras elecciones directas llevaron al poder a un político, Fernando Collor, cuya victoria fue facilitada por los medios de comunicación como una barrera contra la izquierda, para después ser derrocado por la desbocada corrupción que rodeó su conquista y ocupación de la presidencia. Conti, en aquel momento editor de Veja, la principal revista de información del país que tuvo un papel fundamental en la caída de Collor, elaboró en Notícias do Planalto (1999) un extraordinario panorama de las relaciones entre la prensa y el poder en el drama del ascenso

y caída de Collor, con un alcance, profundidad y detalle sin parangón en la bibliografía contemporánea sobre los medios de comunicación. En 2012 añadió un epílogo que reflejaba los cambios que sobrevinieron desde entonces: en las trayectorias personales de los periodistas que entonces fueron héroes de la investigación –ahora principalmente agentes o asesores de políticos en su mayoría sórdidos– y en la suerte general del periodismo en medio del progreso de las tecnologías de la comunicación y de la vigilancia electrónica. Sin noticias de los desaparecidos, los torturadores por la calle, un presidente expulsado de su cargo que se convierte en aliado en el Senado del obrero al que haciendo trampas había quitado la presidencia, periodistas estrella, tanta crítica mercenaria... Brasil no es solamente eso. Pero el arte del país para «refinar» el pasado, como señala acertadamente Wilcken, no se ha perdido.

PATRICK WILCKEN

EL AJUSTE DE CUENTAS

Investigar la tortura en Brasil

EN 2011, EL investigador Vladimir Sacchetta encontró una sorprendente fotografía mientras trabajaba en los archivos públicos de São Paulo. Tomada en noviembre de 1970, mostraba a la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, Dilma, como se la conoce en Brasil, quien a los veintidós años comparecía ante un tribunal militar que la interrogaba sobre su papel en la lucha armada contra la dictadura militar brasileña como miembro del grupo guerrillero de izquierdas VAR Palmares. Dilma tiene el pelo corto; su postura es relajada pero su expresión es de ira, de desafío con un atisbo de aburrimiento, sin doblegarse después de semanas de tortura y más de un año en prisión. Completando el sentido de la imagen están las figuras al fondo: dos oficiales del ejército no identificados recostados en sus sillones, tapándose las caras de los flashes de la cámara. «¿Sabes por qué me gusta la foto?», diría Dilma después, «porque es la verdad. Es lo que sucedió». Quizá le gustó menos la utilización hecha de una imagen que parecía retratar una diferente clase de verdad: una fotografía policial tomada tras su detención por la policía militar después de haber sido acusada de subversión y terrorismo. Con gafas y camisa a cuadros, Dilma mira fijamente a la cámara con el número de su ficha entre las manos. La foto fue ampliamente difundida por la oposición en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2010 en una campaña de desprestigio que no consiguió muchos resultados.

Cuatro décadas después de la fase más violenta de la dictadura, Brasil todavía está lejos de determinar su importancia. Uno por uno, los países vecinos –Argentina, Chile, Perú, Uruguay e incluso Paraguay– han recusado las leyes de amnistía, creado comisiones de investigación y llevado

adelante procesos penales, mientras que Brasil se aferra a su récord absoluto: ni un solo antiguo oficial del ejército ha sido declarado culpable en una causa penal, a pesar de los miles de casos de tortura, asesinato y desapariciones que se produjeron entre 1964 y 1985. En todo caso, ha sido al revés: los abogados del gobierno defendiendo en el Tribunal Supremo la interpretación más amplia posible de la Ley de Amnistía de 1979, y el ministro de Defensa representando a Brasil cuando fue denunciado ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos por la desaparición de más de 60 guerrilleros de izquierda a principios de la década de 1970. Lo que hace que la posición de Brasil sea tan excepcional es que el Partido dos Trabalhadores (PT) —un partido que se formó en oposición a la dictadura y que vio cómo muchos de sus miembros eran encarcelados y torturados durante la era militar— ha estado en el poder durante una década; sus militantes están ahora en la sesentena y son personajes poderosos. Por el contrario, sus anteriores verdugos —los torturadores conocidos— son mayormente oscuros funcionarios del ejército jubilados, ya de avanzada edad.

Este mes de mayo de 2012 señaló un potencial punto de inflexión cuando la presidenta Dilma, a sus 66 años, puso en marcha la primera Comisión Nacional de la Verdad. En una emotiva ceremonia en el Palacio do Planalto de Brasilia, en presencia de los anteriores presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva, sin pelo debido a su reciente tratamiento contra el cáncer de garganta, Dilma contuvo las lágrimas cuando habló de las familias de las víctimas: «Por encima de todo, aquellos que perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si murieran de nuevo cada día, una y otra vez, merecen la verdad de los hechos». Incluso llegar a este escenario había supuesto superar la atrincherada oposición de los militares, que consiguieron obtener concesiones moderando aspectos del decreto que creaba a la Comisión. Siete comisionados elegidos por Dilma —abogados (incluyendo a Rosa María Cardoso da Costa, que representó a Dilma en los años de la dictadura), fiscales e investigadores, dirigidos inicialmente por el juez Gilson Dipp— llevan empleados seis meses, de los dos años que se les han concedido, en la tarea de oír el testimonio de torturados y torturadores y revisar los más de 150 casos de desapariciones y los de más de 300 muertes que se produjeron durante la dictadura. A medida que los comisionados examinan la evidencia, ¿podría ser finalmente este el momento del ajuste de cuentas?

Los años de plomo

En 1964, los militares brasileños derrocaron al presidente democráticamente elegido, João Goulart, y se convirtieron en los pioneros de la Guerra Fría en la región. Chile seguiría sus pasos en 1973, y tres años después empezaría la guerra sucia en Argentina. En lo que fue la original «guerra contra el terror», los militares se aprovecharon de los temores a un golpe comunista que convertiría a Brasil, dado su tamaño y población, no ya en otra Cuba sino en otra China, como diría Nixon. La estrategia que adoptaron, incluyendo la estrecha colaboración con los servicios de seguridad estadounidenses, los métodos de lucha contra la subversión e incluso específicas técnicas de tortura, se convirtió en un modelo para los regímenes militares de América del Sur que llegaron al poder en la década de 1970. Sin embargo, cuando en 1975 esta estrategia quedaba institucionalmente plasmada mediante el violento consorcio de los servicios de seguridad –la Operación Cóndor– los generales brasileños ya estaban buscando una salida a la situación.

El periodista e historiador Elio Gaspari, cuyos cuatro volúmenes de historia de la dictadura siguen siendo una fuente clave¹, ha dividido al régimen brasileño en periodos: desde 1964 a 1967, el presidente Castelo Branco estuvo al frente de una «dictadura provisional», un acuerdo temporal dirigido a fortalecer el país frente a la percibida amenaza comunista; desde 1967 a 1968, el mariscal Artur da Costa e Silva coqueteó con una cierta clase de «dictadura constitucional» antes de que Brasil descendiera a lo que Gaspari llama la «flagrante dictadura» de 1968-1974 con el general Garrastazu Médici, que tomó posesión en 1969. Desde 1974, el presidente Geisel condujo al régimen en un largo y metódico viaje fuera del atolladero. Aunque el periodo de tiempo sobre el que trabaja la Comisión –marcado por dos Constituciones, 1946 y 1988– es amplio y abarca en teoría más de cuatro décadas, la atención principal ha estado focalizada en los años de la «flagrante dictadura» de Gaspari, cuando la tortura era rutinaria y la gente empezó a desaparecer en grandes cantidades.

1 Elio Gaspari, *A Ditadura Envergonhada*, vol. 1, São Paulo, 2002; *A Ditadura escancarada*, vol. 2, São Paulo, 2002; *A Ditadura derrotada*, vol. 3, São Paulo, 2003; *A Ditadura encurralada*, vol. 4, São Paulo, 2004. Respectivamente: *La dictadura avergonzada-descarada-derrotada-atrapada*. Nótese que estas divisiones no se corresponden con las cuatro fases fundamentales del régimen militar como las periodiza Gaspari anteriormente.

Después de los primeros años de gobierno autoritario, el régimen quedó en evidencia en el transcurso de 1968. En São Paulo, una oleada de huelgas coordinadas amenazó con paralizar el centro industrial de Brasil; al mismo tiempo una serie de atentados con bombas y de atracos a bancos anunciaron la aparición de una resistencia armada. En Río de Janeiro, las calles se llenaron con una masiva manifestación de protesta por el asesinato de un estudiante, conocida como la *Passeata dos 100 mil* (la manifestación de los 100.000, de hecho probablemente más cerca de los 50.000). Entre los manifestantes que marcharon a la plaza de Cinelândia estaban las futuras estrellas de la música popular brasileña Chico Buarque, Caetano Veloso y Gilberto Gil, todos entre veinte y treinta años, junto al poeta y compositor Vinicius de Moraes y la escritora modernista Clarice Lispector. Los manifestantes desafiaron abiertamente al régimen, enarbolando pancartas de «*Abaixo a Ditadura. O Povo no poder*», «Abajo la dictadura. El poder para el pueblo».

En diciembre el régimen respondió con un decreto draconiano, el Acta Institucional 5 (AI-5). El presidente Costa e Silva disolvió indefinidamente el Congreso y los Parlamentos de los Estados, prohibió las manifestaciones e implantó una férrea censura sobre la prensa, la música, el teatro y la literatura. Fundamental para los acontecimientos de los cinco años siguientes, el decreto también suspendía el derecho de *habeas corpus* «en casos de delitos políticos contra la seguridad nacional y el orden económico y social», una categoría lo suficientemente amplia como para abarcar cualquier forma de disidencia. El AI-5 fue un «golpe dentro del golpe» y las divisiones en el seno de los militares fueron acalladas cuando la línea dura se apropió del espíritu de la «revolución» de 1964. En la purga que vino a continuación, políticos, funcionarios públicos, sindicalistas y profesores de universidad con inclinaciones hacia la izquierda fueron sumariamente despedidos. Miles de ellos huyeron al exilio, muchos de ellos a Chile, México, Francia y Gran Bretaña.

En la izquierda hubo quienes consideraron que la reacción del régimen era una señal de debilidad o de pánico. Pero estaban equivocados. Tomados por sorpresa cuando surgió la oposición armada, los militares habían empezado a organizarse. Un elemento clave de su éxito estuvo en la red de centros de interrogatorios contra la insurgencia, conocido como los DOI (Destacamento de Operações de Informações), organizados por regiones bajo el CODI (Centro de Operações de Defesa Interna). Gaspari se pregunta, ¿era una coincidencia que el acrónimo DOI fuera

la tercera persona del verbo *doer*, «dañar»? Lo que sucedió en estos centros –denominados con la abreviatura DOI-CODI– y en los anteriores DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) dirigidos por la policía, es lo que está proporcionando gran parte de la materia prima para la Comisión de la Verdad.

La izquierda radical era pequeña, estaba fragmentada y aislada, resultado del fraccionamiento del otrora influyente Partido Comunista de Brasil. Cuando el martillo del régimen golpeó, se había multiplicado hasta convertirse en una monty-pythesca colección de minúsculos grupos sutilmente distintos. Muchos de sus militantes eran veinteañeros de clase media, reclutados en los campus universitarios. Fuertes en retórica marxista, tenían una aversión visceral por la dictadura pero ninguna raíz en la sociedad en general, mucho menos en las clases trabajadoras. Lanzaron una serie de ataques espectaculares pero mayormente simbólicos, incluyendo el secuestro de una serie de diplomáticos extranjeros –el más famoso, el embajador de Estados Unidos, Charles Elbrick (un episodio descrito en la película de 1997 *Cuatro días de septiembre*, de Bruno Barreto)– que fueron liberados a cambio de la puesta en libertad de prisioneros políticos y la difusión en los medios de comunicación de manifiestos izquierdistas. En otra acción, en la que Dilma pudo haber estado tangencialmente implicada, militantes de VAR Palmares robaron 2,6 millones de dólares, 15 millones en la actualidad, de una caja fuerte en la casa de Ana Benchimol Capriglione, en el distrito de Santa Teresa en una colina de Río. Capriglione era la amante de un notoriamente corrupto antiguo gobernador del Estado de São Paulo, Adhemar de Barros, que fue un pionero del eslogan «Rouba mas faz», «Roba pero haz el trabajo». La enorme cantidad de dinero en poder de Capriglione se supone que era lo atesorado de los sobornos que había recibido Barros durante su mandato.

La estrategia de los insurgentes estaba basada en un manual escrito por el referente de la lucha armada, el antiguo miembro del Partido Comunista y dirigente de Ação Libertadora Nacional (ALN), Carlos Marighella. Al contrario que el modelo rural del *foco* cubano, el influyente y traducido *Mini-manual do guerrilheiro urbano* de Marighella, estaba construido alrededor de la idea de que las ciudades eran el terreno ideal desde el que lanzar una lucha guerrillera. Pero en el contexto brasileño, supuso que los militantes fueran rápidamente acorralados en sus bases urbanas, principalmente en São Paulo y Río de Janeiro. Allí, el régimen los aisló

sistemáticamente, siguiendo sus huellas, infiltrándose, torturando y asesinando, para acabar desmantelando sus organizaciones. A principios de la década de 1970 solo quedaban individuos aislados, en una huida permanente. Los audaces atracos a bancos habían degenerado hasta convertirse en robos en farmacias y restaurantes y los procedimientos utilizados, para nada más ambicioso que la supervivencia día a día.

A aquellos que llevaron la lucha al campo no les fue mucho mejor. El ejército limpió sin esfuerzo un puñado de pequeñas bases en Paraná, en el interior de São Paulo, Goiás y Maranhão. La desaparición de la guerrilla del Araguaia, creada por una escisión del Partido Comunista ortodoxo y compuesta por un pequeño grupo de estudiantes universitarios, en su mayoría poco preparados, que intentaron fomentar un levantamiento al estilo maoísta desde su base amazónica en el sur del Estado de Pará, forma actualmente la Prueba Documental A para la Comisión de la Verdad. En una de las acciones más polémicas de los *anos de chumbo* brasileños, entre 1972 y 1974, el ejército capturó, torturó y asesinó a más de sesenta insurrectos. La ofensiva final fue la mayor operación realizada por los militares brasileños desde su despliegue en Italia en la Segunda Guerra Mundial, pero fue silenciada en su momento y los detalles no se divulgaron hasta más de una década después. A pesar de repetidas búsquedas de restos en la zona, hasta ahora solo se han recuperado dos cuerpos.

Las cifras de torturados, asesinados y desaparecidos durante la dictadura brasileña quedan eclipsadas por lo que sucedió en Argentina y Chile, un detalle incesantemente repetido como factor atenuante por la derecha y que dio origen, en un editorial publicado en 2009 por *Folha de São Paulo*, a la desafortunada y muy criticada palabra *dita-branda* (dictablanda), un neologismo del español. Pero considerando el contexto de la situación de Brasil, resulta difícil ser generoso con los militares. Puede que nunca hubiera más de mil personas entre hombres y mujeres totalmente dedicadas a la lucha armada, y de acuerdo con algunas estimaciones solo eran quinientos. Más de cien de ellos desaparecieron, por lo menos el doble fueron ejecutados y la mayoría de los restantes encarcelados y brutalmente torturados. La izquierda, a su vez, solo realizó aproximadamente una docena de ejecuciones planeadas, aunque los ataques con bombas provocaron muertes entre la población civil. La amenaza existencial que los militares utilizaron

para justificar una intervención tan abrumadora fue una invención. Con la excepción de los primeros disturbios de 1968, el régimen nunca afrontó una oposición seria.

Una transición gestionada

Había algo de surrealista en el Brasil de principios de la década de 1970. Por un lado, estaba el primitivo espectáculo de hombres en uniforme colgando a estudiantes de las infames *pau de arara* o percha del loro, ahogándolos con agua y aplicándoles descargas eléctricas con teléfonos de manivela, que se hacía girar más o menos rápido para variar el voltaje. Recetas de cocina y estrofas del poeta épico portugués Luís de Camões en *Os Lusíadas* aparecían en las portadas de dos periódicos nacionales, en un intento de última hora por rellenar los espacios censurados. Por el otro, estaban las insinuaciones de una modernidad largamente esperada. Cuando los canosos generales recorrían la moderna y recién construida capital de Brasilia –concebida como una utopía socialista por el arquitecto y viejo militante comunista Oscar Niemeyer, para entonces trabajando en el exilio en París– el crecimiento económico llegaba al 10 por 100 anual. Los *grand projets* del régimen –los 5.000 kilómetros de la autopista transamazónica, la enorme presa hidroeléctrica de Itapú, los reactores nucleares de Angra dos Reis y los trece kilómetros del puente Río-Niterói, cruzando la bahía de Guanabara– estaban llegando a buen término. Sobre parpadeantes televisores en blanco y negro diseminados por todo Brasil, la nación vio como uno de los más grandes equipos de fútbol de todos los tiempos, con Pelé, Jairzinho y Tostão, endosaba cuatro goles a Italia para conseguir la Copa del Mundo de 1970 en México mostrando su propio estilo. La única amenaza para el éxito de Brasil era el enemigo interior. La propaganda militar de la época era contundente: «Brasil, ámalo o déjalo», *ame-o ou deixe-o*.

A mediados de la década de 1970, con el presidente Geisel, el ejército estaba buscando una salida, no mediante una abrupta renuncia al poder sino más bien a través de una gradual *distensão* o relajación, que condujera a una posible apertura. En 1974, unas elecciones controladas –los partidos de izquierda estaban prohibidos– pusieron el Congreso en manos del Movimiento Democrático Brasileiro (MDB), una «oposición» creada por los propios militares; la censura se relajó, la tortura regresó a sus niveles anteriores a 1968. A medida que los militares aflojaban su control, la verdadera disidencia regresó y fue tolerada. Cuando el responsable del servicio

secreto brasileño, João Baptista de Figueiredo, alcanzó la presidencia en marzo de 1979 la redemocratización estaba en el ambiente y había llamamientos a favor de una amnistía para los miles de disidentes políticos que languidecían en prisión o en el exilio, o que simplemente estaban en paro después de haber sido despedidos de sus trabajos. Aunque esta amnistía había sido concebida por la izquierda, los militares elaboraron un borrador para una ley de amnistía que les favoreciera. Cuando en agosto de 1979 la ley entró en vigor, después de una ajustada votación en un Congreso manipulado desde hacía mucho tiempo por los militares, el texto había sufrido cambios significativos. Acabó siendo interpretado como una amnistía general para ambos bandos, aunque no incluyera a todos. En el artículo 2, claramente dirigido a la oposición armada, se hacía una excepción para «aquellos que habían sido condenados por terrorismo, robo, secuestro y asalto». Ya que era un paso atrás hacia la completa democracia, los militares habían conseguido cubrir su rastro.

Incluso en aquel momento la Ley de Amnistía fue protestada. Un año antes de su aprobación, el presidente del comité de redacción, Eny Raimundo Moreira, formuló una pregunta evidente: ¿cómo se podía amnistiar a agentes del Estado cuando sus crímenes nunca habían sido formalmente investigados y castigados previamente? Más importante, ¿cómo se podía describir el golpear a alguien hasta dejarlo inconsciente, el mantener la cabeza de un detenido debajo del agua o aplicarle descargas eléctricas, como «crímenes políticos» equiparables a distribuir panfletos de izquierda u organizar una huelga? A pesar de estas aparentes inconsistencias, pasarían tres décadas antes de que la ley fuera seriamente recusada en tribunales regionales y nacionales.

En el ínterin, empezaron a acumularse evidencias de abusos sistemáticos de los militares brasileños. El año en que se aprobó la Ley de Amnistía, los abogados que trabajaban a favor de aquellos que habían sido perseguidos durante el régimen empezaron a ocuparse de expedientes de procesos que habían sido apelados en el tribunal militar superior, muchos de ellos conteniendo alegaciones de tortura. Aunque estas alegaciones casi nunca se habían tenido en cuenta durante los juicios, no obstante, siguiendo los protocolos de los tribunales, los jueces las habían registrado diligentemente. Gracias a una burocracia un tanto relajada, dada la naturaleza explosiva de los expedientes, los abogados fueron autorizados a extraer documentos para consultarlos durante un periodo de 24 horas. Utilizando este limbo jurídico, los hicieron llegar,

a un grupo de activistas, encabezados por el cardenal católico Paulo Evaristo Arns y el sacerdote presbiteriano Jaime Wright, que empezaron a examinar sistemáticamente los archivos. El grupo alquiló una oficina pegada al tribunal militar y tres fotocopadoras y empezó el largo y laborioso proceso de duplicar cientos de expedientes judiciales. La documentación fue enviada a São Paulo –en autobús, por avión o en coche– atada en anónimos paquetes. Durante seis años el proceso de fotocopiado continuó sin que fuera detectado. A mediados de la década de 1980, cuando Brasil celebró sus primeras elecciones directas en dos décadas, el duplicado archivo contenía más de un millón de páginas, con más de quinientos rollos de microfilm de transcripciones textuales de los tribunales. Cuatro meses después de la vuelta de la democracia, el proyecto culminó con la publicación de una síntesis del trabajo, *Brasil: Nunca Mais*, en la que se detallaban 1.843 casos de tortura y se citaba a más de cuatrocientos torturadores militares y policías, una gran punta de un iceberg aún mayor, como señalaban los propios autores. El libro, uno de los documentos fundadores de la nueva democracia brasileña, se convirtió en un instantáneo éxito de ventas, y en 2009 estaba en su trigésimo séptima edición.

Excavaciones

En cualquier otro contexto, un libro como *Brasil: Nunca Mais* hubiera creado un efecto dominó, los nombres y los métodos se presentaban sin tapujos, no como vagas alegaciones posiblemente politizadas, sino en el blanco y negro de los expedientes de los tribunales. Pero en el Brasil posterior a la dictadura, ninguno de los 444 torturadores mencionados sufrió ninguna sanción, al margen del ocasional hostigamiento por parte de grupos como Amnistía Internacional. Un gran número de ellos continuaron trabajando en centros policiales de interrogatorio por todo el país, algunos llegando de hecho a ser blanco de nuevas denuncias de tortura; la mayoría ha acabado jubilándose con una generosa pensión del Estado. Hay un sólido argumento de que la persistencia de la tortura por todo el sistema de justicia criminal brasileño es un legado de estructuras y técnicas de la era de la dictadura. Todo lo que ha cambiado son los objetivos: en lugar de los activistas de izquierda con educación universitaria, que desde hace mucho se han unido a la elite, ahora son los *marginais*, los marginados, mayoritariamente jóvenes negros detenidos en las favelas acusados de tráfico de drogas al por menor.

No fue hasta 1995 –una década después de la redemocratización y más de dos décadas después de que se produjeran los hechos– cuando el gobierno brasileño, entonces encabezado por Fernando Henrique Cardoso, empezó a reconocer oficialmente los errores del pasado. Se trataba de un reconocimiento basado en dinero en efectivo: por medio de una recién creada Comisión de Amnistía se distribuyeron grandes sumas en indemnizaciones a las víctimas y, en el caso de los muertos o desaparecidos, a sus parientes. Este proceso continúa hasta la fecha y los casos, que van desde la muerte al despido injusto, ahora suman más de 60.000. (En mayo, la presidenta Dilma recibió 20.000 *reais*, alrededor de 10.000 dólares, del gobierno del Estado de Río en compensación por su detención y tortura; en el momento prometió entregar el dinero a la ONG Grupo Tortura Nunca Mais).

La segunda iniciativa fue un ejercicio de recopilación de datos, que duró 11 años, emprendido por la Comisión Especial para las Muertes y Desapariciones Políticas y que culminó en 2007 con el libro, *Direito à memória e à verdade* (El derecho a la memoria y a la verdad). El libro examinaba 339 casos de muertes y desapariciones entre 1961 y la Constitución de 1988, pero incluso aunque la Comisión es una entidad legalmente constituida que funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, se vio obstaculizada por falta de acceso a archivos secretos. Aunque convincentes, algunos de los registros están débilmente documentados, y en ocasiones se basan en poco más que recortes de prensa de la época. Un año después de la publicación del libro, empezaron a aparecer las primeras grietas en la posición del gobierno sobre la persecución de los crímenes del pasado. En un acto público, el entonces ministro de Justicia de Lula, Tarso Genro, rompió décadas de silencio oficial con una simple declaración: «Desde el momento en que un agente del Estado detiene a una persona y la tortura en un sótano, se pone fuera de la ley, incluso de la del régimen militar, y se convierte en un criminal común. Eso no es un acto político. Es tortura. Y se convierte en un torturador, como cualquier otro torturador reconocido por la humanidad». Una muestra de lo conservador que ha sido Brasil en este tema ha sido que la declaración de Genro se propagó instantáneamente por todos los medios de comunicación nacionales, como si hubiera dicho algo extravagante y controvertido. Le apoyó el entonces secretario de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, otro político del PT que fue detenido y torturado por el régimen antes de pasar a trabajar en el proyecto *Brasil: Nunca Mais*. En cuanto las primeras señales de disidencia dentro del gobierno empezaron a airearse,

el ministro de Defensa Nelson Jobim, el juez del Tribunal Supremo, Gilmar Mendes y más decisivamente, la oficina del Fiscal general, se lanzaron al contraataque defendiendo enérgicamente la interpretación más amplia posible de la Ley de Amnistía².

En 2010, el Colegio Nacional de Abogados impugnó la Ley de Amnistía en el Tribunal Supremo brasileño, sosteniendo que estaba siendo malinterpretada para encubrir la tortura y otros crímenes contra la humanidad y que contradecía las obligaciones de Brasil con la ley internacional. En una sentencia ampliamente recogida por los medios de comunicación nacionales, la impugnación fue derrotada por una clara mayoría de siete votos contra dos. En una paradoja final, el ponente (juez principal) no era otro que Eros Grau, que había sido encarcelado y torturado durante la dictadura militar. La impugnación del Colegio de Abogados estaba mal programada. Solo seis meses antes, Brasil se enfrentó a una resolución más sólida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición del grupo guerrillero del Araguaia. La denuncia había sido presentada originalmente por varias ONG a mediados de la década de 1990, fue aprobada por la Comisión y llegó al tribunal en 2009. Para consternación de las ONG y de los familiares de las víctimas, el gobierno estuvo representado por el ministro de Defensa, en lo que era una clara y agresiva señal.

Cuando en diciembre de 2010 finalmente se dictó la sentencia fue condenatoria. El Tribunal Interamericano declaró a Brasil culpable de la desaparición de 62 personas entre 1972 y 1974. Concluía que se había fracasado por completo a la hora de investigar apropiadamente lo que había sucedido y de llevar a los responsables ante la justicia. Las autoridades habían mantenido deliberadamente a los familiares en la ignorancia y se habían retenido archivos militares clave. Trabajando sobre la consolidación de la jurisprudencia en la región –ya había impugnado la legitimidad de las leyes de amnistía en Perú, Chile, El Salvador, Surinam y Guatemala– el Tribunal Interamericano rechazó rotundamente las apelaciones del gobierno brasileño a la Ley de Amnistía de 1979, que en opinión del Tribunal era nula y sin efecto en el caso de graves abusos de los derechos humanos. La legislación que creó la Comisión Nacional

2 Un devastador retrato de Jobim que lo condujo a su salida del gobierno de Dilma se encuentra en *Piauí*, 59, agosto de 2011. Sobre Mendes, un señalado hombre de Cardoso, véase *Piauí* 47 y 48, agosto y septiembre de 2010.

de la Verdad se precipitó en parte como respuesta a esta sentencia. Pero por lo que se refiere al gobierno brasileño, la recomendación central del Tribunal relativa a la Ley de Amnistía había nacido muerta. Amparándose en las sentencias del Tribunal Supremo, los funcionarios han afirmado repetidamente que el tema ya ha sido resuelto a escala nacional.

Mientras se debatía el principio básico de la amnistía, un grupo de fiscales estaba adoptando otra línea de ataque. A los familiares de los desaparecidos, que durante años han estado infructuosamente organizando campañas para saber qué había sucedido con sus seres queridos, se les ha negado hasta ahora una verdadera sensación de punto final. Esta naturaleza cruel, irresuelta e inacabada de sus experiencias fue precisamente lo que aprovecharon los fiscales mientras trataban, igual que habían hecho sus colegas en Chile, de eludir la Ley de Amnistía. Su argumento tenía una lógica simple pero convincente: ya que en el caso de los desaparecidos no se había recuperado ningún cuerpo, era imposible decir que el crimen original se había producido. En esencia, el Estado había secuestrado a oponentes políticos. ¿Quién podía decir que no estaban todavía retenidos, o que lo habían estado antes de la fecha límite de 1979? La acusación de los fiscales se fortaleció con el hecho de que, siguiendo la jurisprudencia regional, el propio Tribunal Supremo había utilizado precisamente esta interpretación para apoyar la extradición a Argentina de un oficial uruguayo, Manuel Juan Cordero Piacentini, por la desaparición de un ciudadano argentino durante la Operación Cóndor en la década de 1970.

Hasta ahora se han emprendido causas penales contra tres hombres, dos de ellos figuras centrales de los años militares: el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra y el mayor Sebastião «Curió» Rodrigues de Moura (el tercero es el jefe de policía Dirceu Gravina). Un personaje reservado y metódico, Ustra, presidió el famoso centro de interrogación del DOI-CODI en São Paulo, el caballo de batalla de la era militar que procesó a miles de militantes. Curió, por otro lado, dirigió la operación final contra el grupo guerrillero del Araguaia, y había admitido públicamente que el ejército ejecutó a 25 militantes que estaban atados antes de recibir los disparos. Ambos casos fueron rechazados en primera instancia por jueces federales pero ahora están siendo apelados. (Ustra acaba de ser declarado culpable de tortura en un caso civil separado que escapó al radar de la Ley de Amnistía). Con muchos más casos en preparación y el Colegio de Abogados impugnando la decisión del Tribunal Supremo

—empleando esta vez el argumento de que la desaparición es un «crimen continuo»— las escaramuzas en los tribunales van camino de continuar.

Imágenes rebatidas

Quizá más importante que la disputa legal ha sido el resurgir del tema en los medios de comunicación. Nuevas revelaciones están reavivando el interés a medida que finalmente el miedo a los descubrimientos empieza a relajarse y se debilita un pacto de silencio que ha durado cuarenta años. En las recientemente publicadas *Memorias de una guerra sucia*, el oficial de policía retirado Cláudio Guerra ha afirmado que se le pidió que se deshiciera de por lo menos diez cuerpos de militantes que habían sido ejecutados³. Recuerda haberlos llevado a una plantación de caña de azúcar al norte del Estado de Río de Janeiro, donde fueron incinerados en el horno de una destilería. Han aparecido nuevos datos sobre una de las imágenes icónicas de la era: el cuerpo del director de informativos del canal Cultura de la televisión en São Paulo, Vladimir Herzog, de 38 años, colgado de una soga de los barrotes de la celda de interrogatorio del DOI-CODI. Su «suicidio» ha sido siempre discutido, pero la aparición de otra fotografía, no recortada, que muestra la soga colgada de los barrotes más bajos de la ventana, y a Herzog prácticamente arrodillado en el suelo de la celda, confirma un montaje. En febrero de este año, el periódico nacional *Folha de São Paulo* contactó en Los Ángeles con el autor de la fotografía original, Silvaldo Leung Vieira. «Todo estuvo manipulado», manifestó al periódico, «y desafortunadamente yo tomé parte en esa manipulación».

En otra imagen icónica, el cuerpo de Marighella se encuentra en el asiento trasero de un vw Escarabajo, mientras de sus fosas nasales caen hilos de sangre. En la versión oficial, murió durante un tiroteo con la policía, al mando del notoriamente corrupto y violento Sérgio Fleury. El fotógrafo Sérgio Jorge manifestó recientemente a los periodistas lo que sucedió realmente en el escenario. Fleury dio voces a la prensa para que no tomaran fotografías y se mantuvieran de cara a la pared, mientras el cuerpo era depositado en el pavimento y los oficiales desvalijaban sus bolsillos. Entonces, después de tirar de él y empujarlo con pocos miramientos, el cadáver fue metido en la parte trasera del coche y preparado para los

3 Cláudio Guerra, con Marcelo Netto y Rogério Medeiros, *Memórias de uma guerra suja*, Río de Janeiro, 2012.

fotógrafos. «Fue una completa farsa» manifestó Jorge a la revista *IstoÉ*. Preguntado por qué había hablado más de cuarenta años después de los hechos, Jorge dio una elocuente respuesta: «Vi que había llegado el momento de contar la historia. Brasil ha cambiado».

Durante los últimos meses ha surgido un nuevo grupo de estudiantes, *Levante Popular da Juventude* (Levantamiento Popular de la Juventud). Desplegando una táctica ampliamente utilizada en Argentina y Chile, el avergonzamiento público, *esculacho* en portugués, y utilizando medios de comunicación sociales para organizarse rápidamente por todo el país, el grupo ha realizado una serie de exitosas acciones públicas. En mayo tomaron como objetivo a Maurício Lopes Lima, el supuesto torturador de Dilma, haciendo una pintada en rojo en la acera del edificio donde vivía que decía, «El torturador de Dilma vive aquí». En otra acción, el grupo proyectó la imagen del cuerpo de Herzog sobre la sede del ultraconservador Club Militar de Río de Janeiro en el aniversario del *coup d'état* de 1964. La disidencia no se limita a marginales organizaciones estudiantiles. En marzo de 2012, el documental de una hora de duración de Miriam Leitão, *La historia inacabada: el caso de Rubens Paiva*, se emitió en el canal Globo de la televisión. Paiva, un acaudalado ingeniero, hombre de familia de mediana edad y ex diputado federal, acababa de regresar de un paseo por la playa de Leblon cuando fue arrestado en su piso junto a su mujer e hija a primera hora de la tarde del 20 de enero de 1971. Después de ser trasladado al DOI-CODI en la calle Barão de Mesquita de Río, nunca se le volvió a ver. Un médico que fue enviado a su celda a media noche manifestó más tarde que había visto a Paiva tirado desnudo en el suelo, su cuerpo cubierto de hematomas, el estómago tenso sugiriendo una masiva hemorragia interna. Debido al elevado perfil social de Paiva, su muerte fue con toda probabilidad un error; la sesión de tortura se había descontrolado. En un intento ridículamente torpe para encubrir lo sucedido, los militares afirmaron posteriormente que Paiva había sido secuestrado a primeras horas de la mañana por un grupo terrorista, una historia que nunca ha sido corroborada de ninguna manera.

La presencia de Miriam Leitão —una experimentada periodista económica que también fue encarcelada y torturada bajo el régimen militar— interrogando a un impenitente general del ejército retirado, mientras que compasivamente entrevistaba a miembros supervivientes de familias y a un fiscal militar que reúne evidencias, fue un hito. El hecho de que este documental fuera emitido en la normalmente conservadora cadena

de televisión Globo –en su momento una acérrima aliada de los generales– es una muestra de los profundos cambios acontecidos en Brasil. El que estos cambios penetren lo suficiente como para cambiar la opinión dominante y desafiar la arraigada oposición de partes del gobierno y de los militares, es algo que está por ver.

Afrontando el pasado

Históricamente, Brasil se las ha arreglado para burlar a las crisis una y otra vez. Desde la independencia, pasando por la tardía abolición de la esclavitud a finales del siglo XIX, hasta el ascenso del gobierno totalitario en la década de 1930, todas fueron de algún modo olvidadas sin grandes conflictos, aunque dejando sin resolver tensiones subyacentes. A la Comisión Nacional de la Verdad le va a costar trabajo invertir esta tendencia. Una gran parte de las razones de la moderna reluctancia brasileña a afrontar el pasado está en la manera en que los militares gestionaron la última transición de la dictadura a la democracia en la década de 1980. A diferencia de Argentina, donde los militares abandonaron el poder desacreditados después de la derrota en la guerra de las Malvinas, la salida de los generales brasileños fue lenta y estuvo estrechamente orquestada, casi dignificada. Detrás dejaron más una sensación de alivio que de ira. No hubo ninguna purga de la derecha; aquellos que habían apoyado incondicionalmente a los militares, incluyendo el imperio de comunicaciones de Globo, así como las elites rurales y empresariales, planearon incólumes en la década de 1990. Quizá la coyuntura crítica para conseguir alguna forma de ajuste de cuentas por los crímenes del pasado, fue la derrota de Lula en 1994, en su segundo intento por obtener la presidencia, frente a Fernando Henrique Cardoso. A pesar de ser antiguo investigador marxista y autor de textos sobre la teoría de la dependencia, Cardoso llegó al poder gracias a una alianza con algunas de las fuerzas más reaccionarias y prodictadura de la política brasileña, las oligarquías familiares de los Estados más pobres del norte y noreste.

En la década de 1990, el PT era un auténtico partido radical con un declarado programa de izquierda. En el momento en que Lula finalmente obtuvo la presidencia a su cuarto intento en 2002, los fuegos se habían atenuado algo. Convertidos en políticos modernos, desesperados por dar una imagen de centro, muchos en el partido encontraban incómodo recordar sus días como militantes de izquierda. El anterior jefe del PT, José Genoíno, es un caso ejemplar. Uno de los pocos miembros de la

guerrilla del Araguaia que sobrevivió, Curió, ha declarado que salvó la piel colaborando con el ejército. (Aunque pueda parecer extraordinario, este ex guerrillero marxista, que recientemente fue declarado culpable de estar implicado en un gran escándalo de corrupción, ha acabado siendo consejero en el Ministerio de Defensa). La izquierda también ha sido sensible –quizá demasiado sensible– a la constante afirmación de la derecha de que simplemente están buscando la justicia del vencedor, de manera que la Comisión de la Verdad no supone nada más que un acto de venganza tardía.

Ahora que la Comisión Nacional de la Verdad se ha puesto en marcha, con comisionados recorriendo Brasil de arriba abajo para celebrar reuniones públicas y reunir testimonios, su significado está tornándose más claro. Al principio, desde los tortuosos procesos para aprobar la legislación que se requería, a los ruidos iniciales que llegaban de la propia Comisión, parecía como si los militares hubieran neutralizado una vez más a la oposición. Inicialmente, el juez Gilson Dipp pareció apoyar el fatigado estribillo militar de que había dos lados del conflicto y que la izquierda también debía afrontar una investigación. En las primeras declaraciones de la Comisión se hablaba mucho de reconciliación, como si Brasil tuviera que tender la mano a los torturadores en vez de investigarles para posibles enjuiciamientos futuros.

Pero más recientemente el tono conciliador ha desaparecido y las declaraciones públicas se han endurecido. Los comisionados han dejado claro que se centrarán solamente en violaciones cometidas por agentes del Estado. Un grupo de trabajo examinará las actividades de la Operación Cóndor y la Comisión ha prometido investigar el papel de las compañías y de los empresarios que financiaron el régimen. Una de las primeras intervenciones de la Comisión fue en el caso de Vladimir Herzog; por votación unánime, apoyó la petición de la viuda de Herzog para que se cambiara en su certificado de defunción la «asfixia mecánica» por «heridas sufridas durante el interrogatorio». En octubre, los comisionados visitaron Araguaia, entrevistando no solo a protagonistas sino a campesinos y grupos indígenas que quedaron atrapados en la ofensiva del ejército. Y en una visita anterior al Estado de Pará, miembros de la Comisión vincularon explícitamente pasadas estructuras represivas con el contemporáneo aparato de seguridad brasileño; lo que sucedió en los centros DOI-CODI con lo que todavía sucede en detenciones policiales y en prisiones por todo el país.

La investigación cuenta con la ayuda de un nuevo decreto sobre libertad de información, –convertido en ley el año pasado, el mismo día en que se legislaba la creación de la Comisión Nacional de la Verdad– que puede señalar los principios de una era de mayor apertura y transparencia en un país que tiene una larga historia de secretismo oficial. Las dudas siguen existiendo, habida cuenta del hecho de que la Comisión ha manifestado que mantendrá algunas de las sesiones más sensibles a puerta cerrada, y de que los militares continúan afirmando que muchos de los decisivos archivos que describen algunos de los acontecimientos más traumáticos de la época han sido destruidos. Pero la misma existencia de la Comisión Nacional de la Verdad está indudablemente cambiando a Brasil. Incluso antes de que los procedimientos oficiales hubieran despegado, surgieron una serie de comisiones paralelas para ayudar a procesar el cúmulo de evidencias de la época. Cinco Estados –Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul y São Paulo– han establecido sus propias comisiones de la verdad, con ocho más en proceso de hacerlo. Algunos municipios, el Colegio de Abogados de Río de Janeiro y varias universidades también se han movilizado. Por su parte, la Comisión Nacional de la Verdad ha urgido a otros Estados a que hagan lo mismo, manifestando que trabajará en colaboración con las nuevas comisiones.

«Tenía 19 años, pasé tres años en prisión y fui salvajemente torturada», manifestó Dilma durante una comparecencia en el Senado en 2008, dos años antes de que asumiera la presidencia. Según su relato, fue colgada del *pau de arara* y golpeada, antes de ser atada a la «silla del dragón» donde recibió descargas eléctricas en sus pezones, manos, pies, muslos y cabeza. «El dolor es insoportable, no se puede imaginar lo insoportable que es», continuaba, «y por eso estoy orgullosa de haber mentido, porque salvé a mis camaradas de la misma tortura y de la muerte». «No hay espacio para la verdad bajo una dictadura», afirmaba. «Algunas verdades, incluso las más banales, pueden conducir a la muerte».

Mientras la Comisión continúa reuniendo testimonios, ¿qué nuevas verdades aguardan al público brasileño? ¿Añadirá la Comisión significado a la ya voluminosa evidencia de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura? ¿Qué aprenderemos sobre el papel de la actual elite política brasileña durante esos años? ¿Estas verdades solamente se cubrirán de polvo junto a *Brasil: Nunca Mais*, y el *Direito à memória e à verdade* o finalmente se impartirá alguna clase de justicia? La prueba de

fuego para una culminación con éxito será lo que suceda después de que el informe final sea entregado: si Brasil seguirá por fin los pasos de sus vecinos, revocará la Ley de Amnistía y empezará un proceso muy retrasado de ajuste de cuentas judicial; y si esto a su vez servirá como catalizador de una reforma necesaria con urgencia de las fuerzas policiales de Brasil y de su sistema carcelario. A medida que los acontecimientos que han dejado cicatrices en una generación se alejan en el tiempo, ésta podría ser la última oportunidad para que Brasil saliera del búnker histórico en el que él mismo se ha atrincherado.